

# Sesión 62a.

Día 12 de agosto de 1935.

Presente con  
aviso:

Vocal doctor  
Mollaneda.

En Jueros tires, a las diez y ocho horas y veinte minutos del día doce del mes de agosto del año mil novecientos treinta y cinco, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional <sup>de Educación</sup>, los señores Vice-presidente doctor don Félix Garrón Mollaneda y Vocales doctor don José M. Quiroga Costa y profesor don José Riera no, bajo la Presidencia del ingeniero don Octavio B. Tico, el señor Presidente declaró abierta la sesión.

Alto continuo se leyó, aprobó y firmó el acta de la anterior. -

En seguida el H. Consejo tomó en consideración los diversos asuntos que tenía para su resolución, disponiendo:

13.908 6/35. 1º. Instalar en "El Huaco", Dpto Graneros de la provincia de Tucumán, una de las escuelas creadas en marzo 13 ppto la que llevará el N.º 316.

2º. Disponer que Dirección Administrativa remita a la mayor brevedad, los muebles y útiles necesarios para un aula con 24 varones y 15 mujeres, consignando las cargas al señor José Espejo Rodas en Estación Graneros, F. C. C. C. -

3º. Agradecer al señor Espejo Rodas la colaboración que presta al H. Consejo en beneficio de la instrucción primaria.

14.067 6/35. 1º. Instalar en "Cajas de S. roca", Dpto de Chigasta de la provincia de Tucumán, una



de escuela.  
Curumán.

de las escuelas creadas en marzo 13 ppto, la que llevará el n. 317.

2.º. Agradecer al señor Santos Guerra la colaboración que presta al H. Consejo en beneficio de la instrucción primaria.

3.º. Disponer que Dirección Administrativa remita, a la mayor brevedad, los muebles y útiles necesarios para un aula con 32 varones y 28 mujeres, consignando las cargas al señor Segundo T. Sargañaraz en Estación Oklahoma F.C.C.C. -

16.388  
Nombramiento  
de maestra.  
Jujuy.

8/935. Nombrar maestra ayudante para la escuela a la n. 12 de Peico, provincia de Jujuy, profesora normal nacional señorita Modesta G. Paigorri. -

16.386  
Nombramiento  
de maestra.  
Misiones.

16/935. Nombrar maestra de cuarta categoría para la escuela n. 236 de Apóstoles, Misiones, a la maestra normal nacional, señorita Catalina Julia Rans, a quien la Inspección General de Territorios acordará las órdenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y viáticos correspondientes. -

16.387  
Nombramiento  
de maestro.  
Santa Fe.

8/935. Nombrar maestro ayudante para la escuela n. 16 de San Juan, provincia de Santa Fe, al maestro normal nacional señor Ricardo José Galbi. -

10.185  
Traslado  
de maestra.  
San Luis.

8/935. Trasladar a la maestra ayudante de la escuela n. 26 de San Luis, señorita María Angélica Maiz, a la n. 44 de la misma provincia, por ser innecesarios sus servicios en la primera.

9021  
Aprobando  
designación

3/935. Aprobar la designación del maestro normal nacional señor Santiago Domin.



maestro su-  
plente. -  
La Tamba.

quer, como maestro suplente para la escuela  
n° 229 de La Tamba, en reemplazo del director  
señor Marcelo Finochietto, que se halla sus-  
pendido en sus funciones. -

12.500 7/935

Justificar  
de inasis-  
tencias a  
una maes-  
tra. -

1° Justificar la inasistencia incurrida  
por las maestras de la escuela n° 5 de La-  
Tamba, señoras Elena A. Castinieras, Fran-  
cisca J. de Rodriguez y Lidia E. Hecaya-  
ga el día 22 de mayo ppto, feriado nacio-  
nal. -

La Tamba.

2° Pasar este expediente a la Inspección  
Seccional 7a. para su conocimiento y efec-  
tos consiguientes.

5281 7/935  
Se aprueba  
designación  
maestro su-  
plente. -  
La Tamba.

Aprobar la designación del maestro nor-  
mal nacional señor Rafael Blanco, como  
maestro suplente para la escuela n° 128 de  
Tamba, desde el 14 de agosto hasta el 20 de  
noviembre de 1934. -

11.758 7/935  
Cambio des-  
tino de maes-  
tro. -  
Tanguen.

Disponer que el señor Ruben Emilio Jal-  
bi, designado maestro de cuarta catego-  
ría para la escuela n° 51 de Tanguen,  
se haga cargo de su puesto en la n° 109  
de Colonia Centenario del mismo Terri-  
torio. -

13.983 6/935  
Traslado  
de maestra.  
Córdoba.

Trasladar, por razones de buen gobierno es-  
colar, a otra escuela, a la maestra ayudan-  
te de la escuela n° 32 de Córdoba, señori-  
ta Sara C. Maza. -

13.379 6/935  
Instalación  
de escuela.  
Corrientes.

1° Instalar en "Aguirre Gué", Dpto San Luis  
del Palmar, de la provincia de Corrientes, -  
una de las escuelas creadas en marzo 13  
ppto, la que llevará el n° 401.

2° Agradecer a la señora Manuela J. de  
Camorri la colaboración que presta a la



del

acción del Consejo en beneficio de la ins-  
trucción primaria.

3º.- Disponer que Dirección Administrati-  
va remita a la mayor brevedad los mue-  
bles y útiles necesarios para un aula con  
28 varones y 22 mujeres, consignando las  
cargas a la señora Manuela J. de Camo-  
rri, en San Luis del Palmar F. C. Económi-  
co. -

14.748 C/935.  
Utilización  
servicios ad-  
honoram de  
profesor mu-  
nicipal. -  
Chaco.

1º.- Facultar a la Inspección Seccional 5ª.  
de Territorios para utilizar los servicios del  
profesor municipal de cultura física, se-  
ñor Luis Temnerovsky, ofrecidos en carác-  
ter ad-honoram, para las escuelas de  
Resistencia (Chaco), debiendo ajustarse el  
plan de las clases a las prescripciones re-  
glamentarias.

2º Agradecer a la Municipalidad de  
Resistencia (Chaco) y al señor Temnerovsky  
este desinteresado y eficaz concurso en  
favor de la obra escolar. -

15.125. 9/935.  
Ascenso a  
director.  
Santa Fe.

Ascender a director de tercera de la es-  
cuela N° 180 de "Las Chufas", provincia de  
Santa Fe, al maestro ayudante de la N° 306  
de Santiago del Estero, señor Guillermo  
J. Velazquez.

13.590 C/935.  
Traslado y  
nombramien-  
to de maes-  
tros.  
Corrientes.

1º. Trasladar, a su pedido, de la esue-  
la N° 144 a la N° 63 de Corrientes, a la maes-  
tra auxiliar señora María Dora Causal  
de Descalzo.

2º.- Nombrar maestro ayudante de la esue-  
la N° 144 de Corrientes, en reemplazo de la  
señora de Descalzo que cambia de desti-  
no, al maestro normal nacional, señor Car-



ps

Queros Aires, agosto 12 de 1935.-

Habiéndose terminado este Libro de Actas, se continúa la Sesión 62a, celebrada en el día arriba indicado en el Libro de Actas N. 5. —

M. de la Cruz



11

los Manuel Colombo. -

15.860 16/934  
Autoriza a una Uni-  
versidad para hacer  
uso local escuela. -  
C. E. 13. -

Recordar autorización, a la Universidad Popular "Fartolomé Mitre", para hacer uso del local de la escuela N° 20 del Consejo Escolar 13°, Warnes N° 1816, en las condiciones de la resolución del 29 de octubre de 1934. -

15.462 I/935  
Autoriza-  
ción para  
colocar  
chapa de  
bronce. -

Autorizar a la Inspección de Dibujo para que coloque una chapa de bronce en el local del Museo Escolar Garnier, con la siguiente leyenda: "Muestra permanente de dibujos escolares." -

17.553 9/934  
Recordar  
de plazo  
a una ce-  
ladora  
para re-  
gularizar  
su situa-  
ción. -

1°. Recordar seis meses de plazo, a partir de la fecha de notificación, a la celadora de la escuela al Bire Libre N° 1, señorita Catalina Rodríguez, para que regularice su situación de acuerdo a lo establecido por el 76 Consejo el 23 de octubre de 1933, (exp. 17.639-7/933). -

2°. Pasar las actuaciones a Dirección Administrativa a sus efectos. -

161 16/935  
Autorizan-  
do a una  
Universi-  
dad para  
hacer uso  
local es-  
cuela. -  
C. E. 8°

Recordar autorización a la Universidad Popular de Joroko, para hacer uso del local de la escuela N° 8 del Consejo Escolar 8°, Joroko 657 en las condiciones de la resolución del 29 de octubre de 1934. -

9444 13/935  
No se toma  
en consi-  
deración  
renuncia  
de maes-  
tro y se  
le acuer-  
da licen-  
cia. -  
C. E. 13°.

1°. No tomar en consideración la renuncia presentada a J° 1 por el maestro de la escuela N° 32 del Consejo Escolar 13°, señor Eduardo Martínez. -

2°. Recordar al señor Martínez licencia por enfermedad en las siguientes condiciones. desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio, solamente 39 días con goce de sueldo; y desde el 22 del citado mes hasta el 20 de noviembre próximo, sin sueldo. -

10.013 9/935  
Regula-

1°. Aprobar la regulación practicada por Ofi-



pdf

ción honoraria  
rios de apo-  
derado.

Rio Negro

18.846 3/933.

Recordando  
plazo a una  
maestra pa-  
ra regulari-  
zar su si-  
tuación.

C. E. 3°.

cina Judicial a favor del Apoderado en Tied-  
ma (Rio Negro), señor Pedro J. Figot por la su-  
ma de \$ 484.36 m/p en concepto de honora-  
rios por los trabajos realizados durante los meses  
de febrero, marzo y abril p.p.dos.

2°- Imputar el gasto al Anexo E, inciso único (b),  
Ítem 2, Partida 9 del Presupuesto en vigor.

1°- Recordar seis meses de plazo a partir de la  
fecha de notificación a la maestra de la  
escuela n.º 11 del Consejo Escolar 3°, señorita Tu-  
ra Zapico, para que regularice su situación  
de acuerdo a lo establecido por el H. Consejo el  
23 de octubre de 1933, exp. 17.639-19/933.-

2°.- Pasar las actuaciones a Dirección Ad-  
ministrativa a sus efectos.

13.104 2/935.  
Se acuerda  
plazo a di-  
rectora pa-  
ra regula-  
rizar su  
situación.

C. E. 20°.

1°- Recordar seis meses de plazo a partir de la  
fecha de notificación a la directora de la  
escuela n.º 13 del Consejo Escolar 20° señora Ma-  
ría Angélica M. de Somaya, para que regula-  
rice su situación de acuerdo con lo estable-  
cido en la resolución del 23 de octubre de  
1933, exp. 17.639-2/933.-

2°.- Pasar las actuaciones a Dirección  
Administrativa a sus efectos.

11.824 0/935.  
Regulación  
honorarios  
de apodera-  
do.

La Tampa

1°- Aprobar la regulación practicada por  
Oficina Judicial a favor del Apoderado  
en La Tampa, señor Arturo Castro, por la su-  
ma de \$ 566.75 m/p, en concepto de honora-  
rios por los trabajos realizados durante el mes  
de mayo p.p.dos.-

2°- Imputar el gasto al Anexo E, inciso único  
(b), Ítem 2, Partida 9 del Presupuesto en vigencia.

13.734 0/935  
Regulación  
honorarios

1°- Aprobar la regulación practicada por  
Oficina Judicial a favor del Apoderado



de apoderado.  
Rio Negro.

en Rio Negro, señor Arturo B. Llanos, por la suma de \$ 245.58 m/p, en concepto de honorarios por los trabajos realizados durante el mes de junio p/pdo.

2º Imputar el gasto al Anexo E, inciso único (b), ítem 2, Partida 9 del Presupuesto en vigor.

13.344<sup>4</sup> I/935.  
No accedim  
do solicitud.  
formulada  
por una  
maestra.

No hacer lugar a lo solicitado en estas actuaciones por la maestra de la escuela al Bire Libre N° 1, señorita Juana E. Cámara y previa notificación, archivar este expediente.

15.933 I/931.  
Rectifican  
do importe  
reconoci  
do.

1º. Dejar constancia que la suma cuyo pago se reconoce en la resolución del 1º de septiembre de 1933 (p 49), es de \$ 102.40 m/p.

2º. Tasar las actuaciones a Dirección Administrativa a sus efectos.

20.404 E/929  
Escrituración  
parcela  
terreno.  
Córdoba.

1º. Disponer se formalice el convenio propuesto por la Municipalidad de Ifflinger, Dpto de Marcos Juarez, Córdoba, aceptado por resolución de 13 de febrero p/pdo (p 113), de acuerdo con la autorización judicial de que da cuenta el testimonio de p 138 a 140.

2º. Autorizar la escrituración a favor de la referida Municipalidad, de la parcela de terreno de propiedad del Consejo, motivo de la propuesta.

23.105 E/934.  
Cesión gra  
tuita de  
local.  
Tucumán.

Se probar el contrato de cesión gratuita celebrado entre el señor Ricardo E. Carranza y el Inspector Baccional respectivo por un local para funcionamiento de la escuela N° 37 de Los Aguirre, Dpto Chichigasta (provincia de Tucumán) en el que se estipula plazo de diez años, a partir del 20 de marzo p/pdo y demás condiciones de práctica.

2762 D/934  
Acordando  
plazo a un  
director

1º. Acordar seis meses de plazo, a partir de la fecha de notificación al director de la escuela N° 26 de San Luis, señor Cipriano Funes,



pdf

para regularizar su situación.

San Luis.

9719 9/35. Regulación honorarios de apoderado. La Tampa.

13702 8/35. No se hace lugar solicitud forma. casa por mas. tra. Cucumán.

5237 9/35. Hacer a una directora para regularizar su situación. Santa Fe.

14180 9/35. Hacer a una empleada para regularizar su situación.

16400 7/35. Nota y pro.

para que regularice su situación, de acuerdo a lo establecido por el H. Consejo el 23 de octubre de 1933, exp. 17.639-7/933.-

2.- Pasar las actuaciones a Dirección Administrativa a sus efectos.

1.- Se probar la regulación practicada por Oficina Judicial a favor del apoderado en La Tampa, señor Arturo Castro por la suma de \$ 157.50 m/n en concepto de honorarios por los trabajos realizados durante el mes de abril p.pdo.-

2.- Imputar el gasto al Anexo E, rubro único (b), ítem 2, Partida 9 del Presupuesto en vigor.

3.- No hacer lugar a lo solicitado en estas actuaciones por la maestra de la escuela n.º 8 de Cucumán, señorita Tia Romero Jarros.-

1.- Se acordar seis meses de plazo, a partir de la fecha de notificación a la directora de la escuela n.º 74 de Santa Fe, señora Hortensia M. de Quiñones, para que regularice su situación de acuerdo a lo establecido por el H. Consejo el 23 de octubre de 1933, exp. 17.639-7/933.-

2.- Pasar lo actuado a Dirección Administrativa a sus efectos.

1.- Se acordar seis meses de plazo a partir de la fecha de notificación, a la empleada de la Repartición, señorita Estelvir Bissara Lucero, para que regularice su situación de acuerdo con lo establecido por el H. Consejo el 23 de octubre de 1933, exp. 17.639-7/933.-

2.- Pasar las actuaciones a Dirección Administrativa a sus efectos.-

Se probar la siguiente nota explicativa y el proyecto de ley sobre unificación bajo una sola



yecto de ley  
unificación  
de estudios  
primarios.

duración de los estudios primarios en toda la República, presentados por el señor Presidente.

" Buenos Aires, agosto 12 de 1935.-

S. E. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Doctor Don Manuel M. de Triunfo.

Tengo el honor de someter a la consideración de V. E. el adjunto proyecto de ley destinado a unificar bajo una sola dirección los estudios primarios en toda la República.

El Consejo Nacional de Educación que me honro en presidir, cree interpretar con esta importante innovación el anhelo de los educadores de las provincias argentinas y de todos sus habitantes y el pensamiento de hombres eminentes que desde hace años y en diversas ocasiones han sostenido que la enseñanza primaria debe ser impartida por el Gobierno de la Nación. Un análisis desapasionado del asunto nos lleva directamente a la conclusión de que una enseñanza primaria dirigida por una sola autoridad, con programas uniformes en general, variables solamente para adaptar sus enseñanzas especiales a las modalidades de cada región, tendrá alcances extraordinarios desde cualquier punto de vista que se considere. - Con esta innovación el magisterio de las provincias no se vería ya en situación distinta a la de los maestros nacionales. La coexistencia en las provincias de las escuelas que éstas sostienen y las que el Gobierno Nacional ha creado y sigue creando con arreglo a la Ley Lainez coloca a los maestros



25

de ambas jurisdicciones, en innumerables casos, en actitud de franca hostilidad por la situación de indudable privilegio que ocupan los segundos del punto de vista jerárquico y económico.

La permanencia de una escuela Lainez en las proximidades una provincial es motivo de emulaciones que se traducen en intrigas para despojar una en beneficio de la otra con los perjuicios que esta lucha de influencias acarrea a la enseñanza. Interpretaciones diversas por autoridades que suelen ser antagónicas ya sea en los métodos de enseñanza, en la forma de celebrar nuestros fastos o en la apreciación de los hechos de la historia patria introducen divergencias que repercuten en el espíritu de los educandos. Si a esto se agrega los diferentes planes de estudios que rigen en general en ambas jurisdicciones y la limitación de los estudios en las escuelas de la Ley Lainez cuyo ciclo incompleto no permite el acceso a la segunda enseñanza, se tendrá un pávido reflejo del deficiente estado actual de la enseñanza primaria en las provincias. Una acción vigorosa en favor de la educación popular que tienda a atenuar y suprimir con el tiempo el hecho deprimente del analfabetismo no podrá emprenderse con perspectivas de éxito sin que ella esté dirigida por una sola autoridad.

El adjunto proyecto de ley tiende a suprimir los inconvenientes que he enunciado



ya llevar a la República, que necesita como toda democracia ciudadanos ilustrados, a un alto grado de perfección. - En sus cláusulas están sintéticamente expresados los medios y los fines, tratándose en ellas en primer término de obviar los reparos de orden constitucional que pudieran oponerse a su sanción y, además, de asegurar la situación de los maestros que pasarían a jurisdicción nacional, tanto del punto de vista de su estabilidad como del justo derecho que tengan a un retiro bien ganado. -

En los presupuestos del año 1934 de las catorce provincias se ha destinado para la instrucción primaria la suma total 60.076.875.60 pesos mpu sin incluir la subvención nacional que asciende a 4.530.000.00 mpu. - La Nación por su parte ha invertido ese año, en las escuelas Primarias exclusivamente, la suma de 26.778.335.48 pesos la que, agregada a la subvención nacional, da un total de 30.708.335.38 pesos.

Esta suma representa el cincuenta por ciento de la cantidad prevista por las provincias para la educación popular. - Pero hay provincias que cumplen penosamente su obligación de asegurar la educación común. - En algunas de ellas es tan reducido el número de escuelas que sostienen que los gastos insumidos por la Dirección central y por la indispensable vigilancia son desproporcionados con los exigüos resultados obtenidos. La dirección única suprimiría los gastos duplicados con indudable beneficio para el desarrollo de la educación. La falta del sistema de la coexistencia de los dos juicios



ps

decisiones se advierte examinando en detalle las cifras de lo que ciertas provincias destinan a la enseñanza primaria comparadas con lo que la Nación gasta en ellas.

En el cuadro adjunto se ve que la suma prevista en los presupuestos de ocho provincias asciende a \$ 5.600.038.50 mientras que en ellas la Nación invierte \$ 15.727.463.37 ó sea el triple. - Pero la escasez de recursos en estas provincias no puede ser causa suficiente para que las poblaciones de las mismas no gocen ampliamente de los beneficios de la educación. - La Nación es una y todos sus ciudadanos deben estar en igualdad de condiciones en lo que respecta a su educación. Preocupación ineludible del Gobierno de la Nación debe ser el propender a que todos los habitantes de la República se conviertan por la educación en ciudadanos argentinos, con toda la dignidad que requiere esta situación. Es ello tiende el proyecto de ley de unificación de la enseñanza. La Ley Lainez, que tan eminente servicios ha prestado durante los treinta años de su vigencia, es actualmente insuficiente. - Y su insuficiencia deriva no solamente de la duplicación de los servicios en muchos casos y de los sentimientos de emulación que despierta y a que ya me he referido sino también de que solo contempla una instrucción limitada a cuatro grados elementales.

El número de escuelas que sostienen las provincias ascendió en 1934 a 5.426 con 26.276



maestros y una inscripción de 775.796 alumnos y el número de escuelas Lainez instaladas en ellas fué de 3.477 con 9.970 maestros y una inscripción de 339.533 estudiantes... De estas cifras generales se deduce, tomando como gastos de las provincias las previsiones de sus presupuestos más la subvención nacional o sea 64.606.875.60 ¢ y como gastos de la Nación la suma de 26.178.335.40 ¢ que invierte en las escuelas Lainez, que cada escuela cuesta a las provincias, en un término medio general 11.906.92 ¢ y cada alumno 83.27 ¢ y a la Nación 7.529.00 ¢ y 77.10 ¢ respectivamente.

Esto significa que, con las cuotas de las provincias y la subvención nacional, podrían sostenerse por la Nación con holgura las actuales escuelas provinciales y agregar nuevos grados a las escuelas Lainez para impartir una instrucción más completa... Pero como el propósito esencial de la ley que se proyecta consiste no solo en unificar la enseñanza sino también en intensificarla, y como, por otra parte, se dará el caso de que en algunas provincias los promedios generales obtenidos se aproximen a los costos de las escuelas Lainez, es muy posible que el Tesoro Nacional deba hacer desembolsos que nunca desequilibrarían las finanzas de la Nación y que estarían perfectamente justificados por los altos fines de adelanto y bienestar de todas las provincias y del progreso de la ilustración (Art. 67 - inc 16. C.N) que se tienen en cuenta en esta ley. Por lo demás el artículo 9º del proyecto prevé un reajuste quinquen-



nal para equilibrar en lo posible las sumas que se invierten en el quinquenio siguiente. -

No podrán negarse de un punto de vista elevado y patriótico los inmensos beneficios que para el progreso de la cultura general del país traería la unificación e intensificación de la enseñanza primaria. -

La objeción que podría hacerse por algunos se fundará, sin duda, en la letra del artículo 5° de la Constitución Nacional que dice que la educación primaria debe ser asegurada por cada provincia.

La aplicación literal de este principio, sin relacionarlo con otras disposiciones de la Carta Fundamental, nos llevaría a la conclusión de que todas las leyes dictadas por el Congreso que representan un auxilio a las provincias para asegurar la educación primaria serían inconstitucionales, desde el momento en que el artículo 5° no autoriza expresamente semejantes contribuciones. Serían así, esa tacha las leyes de subvenciones escolares, la Ley de Educación Común de 8 de julio de 1884 en lo que se refiere a la creación y sostenimiento por la Nación de las escuelas normales y de sus escuelas comunes anexas y a la Ley Lainer de 19 de octubre de 1905.

Pero entre las atribuciones del Congreso se encuentra la consignada en el artículo 67, inciso 16 de la Constitución que dice: "Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la cultura



ción, dictando planes de instrucción general y universitaria, etc?

Los tratadistas de Derecho Constitucional concuerdan en que ambas disposiciones son concordes lo que, por otra parte, es indudable. Sin embargo, para afirmar más el concepto, citaré la opinión de dos constitucionalistas eminentes y haré enseguida un resumen muy somero de la discusión de las leyes que he citado. -

El tiempo, el mejor conocimiento recíproco y la convivencia en la ciudad Capital, como a todos los argentinos, ha ido depurando de sus elementos egoístas y retardatarios el federalismo un tanto receloso de las primeras épocas de nuestra vida institucional. - Ello ha permitido dictar leyes de carácter nacional para unificar servicios tan importantes como las Obras Sanitarias, La Vialidad y los Impuestos Internos con evidente beneficio para el bienestar general. -

En lo que respecta a la educación, el Congreso ha encontrado siempre la forma de combinar los preceptos constitucionales de que he hecho mención para dictar leyes de educación que han surtido benéficos efectos y que nunca han sido tachadas de afectar el sistema federal. -

Dice José Manuel Estrada (Derecho constitucional, Tomo 1.º. págs 294 y 295): "se ha preguntado: no hay contradicción entre todos estos artículos de la Constitución? Cúal debe ser la regla a que hemos de atenernos? A. quién corresponde el cuidado de la enseñanza? B. quién corresponde proveer



a los medios de que ella se difunda? A quien compete su organización? Es función de las provincias o de la Nación? Existe o no al principio de la libertad de enseñanza? Es il conciliable con la facultad del Congreso para dictar planes generales de instrucción? A mí me parece que todas las dificultades sobre esta materia son puramente aparentes. El Art 67 faculta en efecto al Congreso para dictar planes de instrucción general y universitaria... Por planes de instrucción general no puede entenderse otra cosa sino planes de instrucción primaria. Ahora bien: esta cláusula deroga la consagrada en el artículo 5º, por la cual se dice que las provincias tienen deber primordial de atender a la educación primaria? Evidentemente no; son artículos que deben conciliarse, y si se concilian entre sí y también con el artículo 14, entonces veremos a establecer que el Congreso puede dictar planes generales de instrucción, es decir: que el Congreso puede fundar, proteger y auxiliar establecimientos de instrucción que otorguen todos los grados de la enseñanza pública, y de hecho como <sup>lo expone</sup> cuando nos ocupemos de la organización administrativa de la instrucción pública, el Congreso Nacional coopera al sostenimiento de la educación y de la enseñanza en todos sus grados."

Don Agustín de Vedia en su libro titulado Constitución Nacional dice en la página 53:

"Los primeros gobiernos constitucionales erigieron que la instrucción pública era un asunto privativo de las provincias, un dere-



cho y una función inherentes a su autonomía, y no hicieron otra cosa que inculcar en el sistema del artículo 5°. El gobierno federal no debía dar instrucción primaria, como no debía establecer régimen municipal ni administración de justicia en el orden local. -

Su función consistía en garantizar el goce y ejercicio de las instituciones a las provincias que diesen cumplimiento a la constitución, fundándolas y manteniéndolas. - Pero no tardó en reconocerse que la acción de aquellas era muy débil y precaria para alcanzar esos resultados por sí misma; que la instrucción primaria no interesaba únicamente a las provincias, sino muy principalmente a la Nación y que la concurrencia del gobierno federal era por lo menos indispensable para hacer efectiva la instrucción primaria en las primeras; y comentando el inciso 16 del artículo 67, transcribe la opinión de Estrada que he citado y manifiesta su absoluta conformidad con ella. -

La primera ley de subvención nacional lleva la fecha de 21 de Septiembre de 1871 y fué proyectada por el doctor don Nicolás Avellaneda, ministro de Fomento. Según ella, las provincias que se acogieran a sus beneficios recibirían una subvención, variable según la situación de cada provincia, para la construcción de edificios para escuelas, adquisición de mobiliario, libros y útiles, y sueldos de maestros. - En la discusión poco se habló sobre la constitucionalidad de la ley. El miembro informante senador Lavallée se refirió a esta ley en términos muy breves.



"No habría de detenerme digo, en fundar la constitucionalidad de este proyecto puesto que si bien la Constitución Nacional impone a las provincias el deber de fomentar y mejorar la instrucción primaria no hay artículo ninguno del Código que prohíba igual cosa al Gobierno Federal. La práctica recibida de muchos años a esta parte, es que el Gobierno Nacional subvencione a la instrucción primaria de las provincias. El Ministro Dr. Villanueva insistió en la necesidad de que todos, los hombres llamados a participar en la vida pública por medio del voto popular sean capaces de desempeñar con ciencia y conciencia los puestos a que sean llamados. - Es inútil decir, agregó, que los países con nuestras instituciones deben dar a la educación la universalidad que tienen nuestros derechos políticos. Hace poco se trataba en el Senado de los Estados Unidos esta cuestión y un Senador entró en este terreno y ocupándose del principio de la educación universal exponía que este principio está contenido de un modo esencial en la forma republicana de gobierno y que, como comprendido, debía ser igualmente atendido por la acción del Gobierno Federal y de los Estados."

En el resto de la discusión no se vuelve sobre el tema.

En la Cámara de Diputados el diputado Ocantos combatió el proyecto porque daba al Poder Ejecutivo facultades ilimitadas y establecía para él una facultad contralizadora, "cuando esto debe con-



currió con el Congreso a subvencionar la educación primaria". El Sr. ministro Dr. Ballesteros rebatió los argumentos derivados de la centralización y de las facultades ilimitadas del proyecto y agregó: "que él era constitucional, por cuanto el Gobierno Nacional era un poder concurrente con el de las provincias en la reglamentación de la instrucción pública."

En la discusión de la ley de subvenciones vigente n.º 2737 de 4 de octubre de 1890 se dió por sentado el principio de la concurrencia de ambas jurisdicciones en la educación popular. Solo citaré algunas palabras del Senador Benjamín Lar, porque afirman documentamente este principio: "la materia, expresó, puede decirse está juzgada en derecho y demostrada en el hecho su conveniencia; juzgada en derecho porque los poderes encargados de pronunciarse combinando la obligación constitucional impuesta a las provincias, de asegurar la instrucción primaria, con las atribuciones del Congreso de acordar subvenciones necesarias y la de proveer al progreso del país, han usado de sus facultades conservando constantemente el auxilio de la Nación, para hacer extensivos al mayor número posible, los beneficios de la educación, contribuyendo así a que esta gran obra nacional no sufra las lentitudes a que forzosamente se encontraría sometida sino hubiera de contar con otros recursos que con los limitados que pudieran dedicarle las provincias."

La ley de educación común, vigente, de 8 de



julio de 1884, fué proyectada por la Comisión de  
 la Cámara de Diputados para ser aplicada en  
 toda la República. El miembro informante Dr.  
 Demaría inició su discurso manifestando que  
 iba a dar algunas breves explicaciones "sin  
 entrar a fundar la idea general, esto es, si de-  
 be o no existir una ley nacional de educación,  
 porque me parece de todo punto inútil. No creo  
 que haya un solo miembro del Congreso que pien-  
 se de una manera contraria". Más adelante a-  
 gregó: "tengo, pues que establecer por qué en es-  
 te artículo primero, la comisión se ha creído fe-  
 cultada para hacer extensiva a toda la Na-  
 ción esta prescripción. Para ello ha con-  
 sultado la Constitución Nacional. Encontró  
 que por el artículo 67 inciso 1º el Congreso es el  
 que tiene la facultad de dictar leyes que  
 autoricen planes generales conducentes al ade-  
 lanto y al desarrollo de la instrucción, en la  
 Nación, y que por el artículo 5º se confiere a las  
 provincias la facultad de dar sus cons-  
 tituciones entre otras cosas, las disposiciones  
 que aseguren su educación común. Se ve, pues,  
 lo restringido de la facultad que las provin-  
 cias tienen por la Constitución Nacional,  
 respecto de esta materia, y la amplitud que la  
 misma ha dado al Congreso. Creo bastante  
 esto para no insistir en la facultad que va-  
 mos a hacer extensiva a toda la Repúbli-  
 ca, la facultad que tenemos de decretar la e-  
 ducación obligatoria."

El diputado Leguizamón rebatió la opinión  
 del miembro informante y manifestó que la  
 ley que se dicte debe referirse exclusiva



mente a la Capital y a los Territorios Nacionales. -  
 Reconoce que la Constitución admite dos principios, uno que exige a las provincias la organización de la instrucción primaria y otro que acuerda al Congreso la facultad de propender al progreso de la ilustración nacional por medio de planes de instrucción general y universitaria. - He firmado que las provincias han entendido hasta ahora, de una manera uniforme, que tenían el derecho de legislar sobre la instrucción primaria en sus respectivas jurisdicciones y que la Nación lejos de contradecir este derecho lo ha reconocido de una manera explícita. - En resumen manifiesta que "no es el caso de discutir la facultad desde un punto de vista constitucional: el derecho existente es otro, y creo que hay toda prudencia y toda conveniencia en respetarlo".

El Diputado Echagüen Rodríguez, refiriéndose a esta parte del proyecto manifestó lo siguiente: "Sería también un punto discutible, creo, dando al artículo 1° de la ley el alcance liberal que tiene, la facultad del Congreso para sancionarlo; pero sea de esto lo que fuere, por razones de orden político, yo estaré en todo caso en contra de esa parte de la ley."

El proyecto de la Comisión fue sustituido por otro que legislaba solamente para la Capital y los Territorios Nacionales. - Sabido es que la discusión de fondo se hizo alrededor de la cuestión religiosa. -

En el Senado tuvo lugar una larga discusión apropiada de cual de las dos Cámaras era la iniciadora, fundada en el hecho de que el Senado sancionó el 8 de octubre de 1888 un pro-



yeto de ley que, al aprobar el decreto del Poder Ejecutivo de 28 de enero de ese año creando el Consejo Nacional de Educación extendió sus funciones a toda la República. En el debate no se hizo la cuestión constitucional sobre las facultades del Congreso para dictar una ley que rija en toda la República y la única referencia a esta materia que se encuentra son estas palabras del Ministro Wilde: "El proyecto de la Cámara de Diputados consulta todas las necesidades del país; él no toca este punto que es muy discutible: si el Congreso puede legislar en materia de educación común para toda la República, limita la acción de la ley a la Capital y Territorios Nacionales, mientras que la ley de educación sancionada por esa aprobación del Senado se refiere a toda la República". Duce en duda que las provincias aceptarían esa imposición de la ley y agrega: "el proyecto de la Cámara de Diputados consulta, pues, esta susceptibilidad, diré."

El Senado insistió en su sanción del año 1881 y después de largas discusiones sobre cuestiones de procedimientos se sancionó por el Senado el 8 de julio de 1884 la ley votada por la Cámara de Diputados el año anterior.

La Ley 4874 por la que el Consejo Nacional de Educación puede crear escuelas de un tipo elemental en las provincias que lo soliciten fué presentada por el Senador Lainer en la sesión del 7 de septiembre de 1905



y fundada con un discurso en el que se leen estas palabras: "El proyecto que tengo el honor de presentar, altera un tanto la forma hasta ahora establecida por la legislación corriente para la intervención del Gobierno Nacional en la educación primaria de la República; forma simplemente convencional por cuanto desde hace muchos años se ha estimado perfectamente concurrente la acción nacional y provincial en la educación primaria, desde que se ha considerado imprescindible, tanto como lógico y necesario, el establecimiento de escuelas que, bajo el nombre de escuelas de aplicación, son, en el fondo, establecimientos de exclusiva educación primaria... Y no porque se haya cambiado el nombre de las cosas se altera su verdadera esencia; por el contrario, y aplaudo la resolución que ha creado y entregado al poder grande y eficaz de la Nación, el medio de rivalar en toda la República la cultura nacional por la diseminación de la educación primaria en esa forma".

El proyecto del Senador Lainer decía en su artículo 1.º: "El Consejo Nacional de Educación procederá a establecer directamente en las provincias, escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales, etc."

La Comisión de Legislación, compuesta por los Senadores Herrera, Talacio y Tucio, despachó el proyecto con una modificación al artículo 1.º consistente en el agregado "que lo soliciten" después de "provincias".

El senador Dámaso Talacio, informando este punto dijo: "Ha agregado (la Comisión) esta cláusula para evitar toda discusión



y toda duda que, aunque débilmente, ha sido enun-  
ciada respecto de la constitucionalidad de este  
proyecto de ley; y así se enunadra la Comisión den-  
tro de los precedentes establecidos por el Congreso en  
varias otras materias de carácter eminentemen-  
te municipal". Agregó que con eso ha pensado  
que se subsanaba el escrúpulo de los que creen  
que la ley podría importar un avance a las fa-  
cultades de las provincias pero que, él, particu-  
larmenete, está en abierta disidencia con esas  
dudas y piensa que el proyecto sin la cláusula  
es perfectamente constitucional.. "Lo en-  
cuentro, dice, ni en el artículo 5, que "obliga  
a las provincias a proporcionar la instruc-  
ción primaria, bajo cuya condición el Go-  
bierno Federal les garante el goce y ejerci-  
cio de sus instituciones, ni en el 14, que con-  
sagra la libertad de enseñanza, ni en  
el 67, inciso 16, que coloca entre las atribu-  
ciones del Congreso, la de promover la pros-  
peridad del país, el progreso de las pro-  
vincias y de la instrucción primaria,  
no veo, digo, motivos que pudieran despertar  
recelos o choques y conflictos entre los gobier-  
nos." Concluye su informe citando algunas  
palabras de José Manuel Estrada que en  
parte, he transcripto.. Sancionado por el Se-  
nado pasó el proyecto a la Cámara de Di-  
putados donde fué sancionado el 29 de sep-  
tiembre con algunas modificaciones de ca-  
rácter financiero.

En el proyecto de ley que someto a la consi-  
deración de V. E. y que, con sus fundamen-  
tos, ha sido aprobado por el H. Consejo que



p. 13

me honro en presidir, se han tenido en cuenta todos los antecedentes constitucionales y legislativos de que se ha hecho mención. - El Gobierno Nacional continuará sosteniendo las escuelas que ha creado en las provincias con arreglo a la Ley Lainer y se hará cargo de las escuelas provinciales, haciendo encuadrar a ambas categorías de escuelas dentro del amplio marco de las disposiciones de la Ley de Educación Común N.º 1420. - Pero las provincias seguirán asegurando con sus propios recursos el sostenimiento de las escuelas que pasan a jurisdicción nacional en la forma prevista en los artículos 8 y 9 del proyecto. - Dedúcese de esto que en él se respetan las prescripciones constitucionales en forma más estricta de lo que lo han hecho las leyes que he mencionado. - La reforma importa únicamente establecer una unidad de dirección y de administración para evitar la anarquía derivada de quince orientaciones distintas en la formación de nuestros futuros ciudadanos. - Significa también dar un vigoroso impulso a la educación primaria que se encuentra deturida por las causas enunciadas. El Consejo Nacional de Educación, en presencia de la situación actual que deriva de los hechos enunciados que se han puntualizado en esta nota, los que impiden un franco desarrollo de la educación primaria, ha preparado el adjunto proyecto de ley que lleva a la consideración de V. E. y que espera ha de merecer la aprobación del Poder Ejecutivo.

Saludo a V. E. con toda consideración. -

Art. 1.º. Las disposiciones de la Ley de Educación Común N.º 1420 de 8 de julio de 1884 se harán extensivas a



Toda la República dentro de las normas que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 2.º.- Fijase el término de un año a contar de la promulgación de la presente ley para que las provincias manifiesten su conformidad con sus disposiciones, sin perjuicio de situaciones especiales que puedan tener origen en sus Constituciones.

Art. 3.º.- Las escuelas fiscales de las provincias que manifiesten su conformidad con la presente ley pasarán a depender del Consejo Nacional de Educación.

Art. 4.º.- El Consejo Nacional de Educación administrará estas escuelas por medio de Consejos Escolares formados por vecinos de cada provincia que reunan las condiciones preceptuadas en la Ley N.º 1420, los que tendrán las atribuciones a que la misma se refiera.

Art. 5.º.- Los Consejos Escolares serán designados en la siguiente proporción: dos por los Gobiernos de cada provincia y los otros dos y el Presidente por el Consejo Nacional de Educación.

Art. 6.º.- El personal técnico, directivo y docente de las escuelas provinciales que tenga título de maestro normal nacional o provincial y una antigüedad no menor de dos años en sus respectivos cargos será confirmado de inmediato como titular y al que no lo tenga y acredite la misma antigüedad será reconocido como interino y confirmado como titular si durante los tres años subsiguientes mereciera buen concepto profesional y personal.

Art. 7.º.- El personal de las escuelas provinciales que en virtud de la presente ley pase a



dependen del Consejo Nacional de Educación tendrá derecho a los beneficios de la jubilación con arreglo a la ley respectiva. - El Poder Ejecutivo adoptará las disposiciones necesarias para el reconocimiento de los servicios anteriores determinando los descuentos que pudieran corresponder para su incorporación a la Caja Nacional de Jubilaciones y convenirá en cada caso la forma en que los gobiernos de provincia le harán entrega de los aportes hechos por dicho personal a las respectivas Cajas.

Art. 8.º. Las provincias entregarán a la Nación por semestres vencidos las sumas que cada una de ellas destina en su presupuesto del año anterior a la sanción de esta ley, para la instrucción primaria. - La cuota de cada provincia será empleada en el sostenimiento y creación de las escuelas de su jurisdicción y los excedentes que pudieran resultar le serán devueltos. En caso de demora en el pago de la cuota el Poder Ejecutivo podrá deducir la cantidad respectiva de lo que corresponde a la provincia por la Ley 12.739. -

Art. 9.º. Cada cinco años se hará un reajuste de las cuotas con que cada provincia debe contribuir a la instrucción primaria en su respectiva jurisdicción teniendo en cuenta las cifras que arroje la inscripción de alumnos. -

Art. 10.º. A contar de la sanción de la presente ley el Consejo Nacional de Educación no dispondrá la creación de nuevas escuelas con arreglo a la Ley N.º 4874 de 19 de octubre de 1905.

Art. 11.º. El Poder Ejecutivo continuará abonando las subvenciones a que se refiere la Ley N.º 2737 hasta la fecha de acogimiento de las provincias a los beneficios de la presente, en cuya oportunidad



cesará el pago. Se contará de un año de la promulgación de la presente ley, la Ley N° 2737 quedará derogada.

Art. 12.- Los gastos que requiera la ejecución de la presente ley se imputarán a la misma hasta que sean incluidos en la Ley de Presupuesto.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

### Ejercicio de 1934.

Cuadro demostrativo de los recursos provinciales destinados a instrucción pública.

Subvención nacional Ley N° 2737 y suma invertida en cada provincia por Ley N° 4874.

Provincia	Total del presupuesto de Gastos de la Provincia 1	Presupuesto Escolar			Invertido por Ley N° 4874 5	Total de Cuentas Generales. Columnas 3 y 5.
		De Rentas Provinciales 2	Subvención Nacional 3	Total del presupuesto escolar 4		
Buenos Aires	124.682.657.79	26.050.564.00	750.000.00	26.800.564.00	2.452.726.49	3.202.726.49
Santa Fe	40.868.424.00	12.412.100.00	480.000.00	12.892.100.00	2.087.138.78	2.562.138.78
Córdoba	28.448.404.86	4.679.948.00	390.000.00	5.069.948.00	2.760.857.68	3.150.857.68
Entre Ríos	12.517.803.72	3.671.713.40	450.000.00	4.121.713.40	1.247.779.08	1.697.779.08
Mendoza	19.877.382.60	4.767.223.70	270.000.00	5.037.223.70	1.296.724.89	1.566.724.89
Bucumán	13.000.805.27	2.895.288.00	300.000.00	3.195.288.00	2.495.645.19	2.795.645.19
Corrientes	4.968.391.95	1.483.240.00	270.000.00	1.753.240.00	3.023.734.31	3.293.734.31
S. del Estero	5.523.445.70	907.929.50	270.000.00	1.177.929.50	3.334.874.11	3.604.874.11
Jujuy	3.554.416.94	483.684.00	225.000.00	708.684.00	565.889.29	790.889.29
San Luis	2.513.469.00	429.459.00	225.000.00	654.459.00	1.496.827.86	1.721.827.86
San Juan	6.634.908.79	1.295.000.00	225.000.00	1.520.000.00	1.392.998.16	1.617.998.16
Salta	4.386.994.18	718.560.00	225.000.00	943.560.00	1.048.529.63	1.273.529.63
Catamarca	1.548.705.46	181.370.00	225.000.00	406.370.00	1.705.676.38	1.930.676.38
La Rioja	1.290.112.00	100.800.00	225.000.00	325.800.00	1.268.933.63	1.493.933.63
	269.815.922.26	60.076.875.60	4.530.000.00	64.606.875.60	26.178.335.48	30.708.335.48

Dirección Administrativa, agosto 2 de 1935.

Entre líneas a f. 197 renglones 8-9, f. 198 renglones 12-13.